



ARGENTINA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2020

RESUMEN

Argentina es una república constitucional federal. En octubre de 2019, Alberto Fernández fue elegido presidente en elecciones que observadores nacionales e internacionales consideraron, en términos generales, libres e imparciales. En la misma jornada, el país también celebró elecciones municipales, provinciales y nacionales. Los votantes eligieron a los gobernadores de 22 de las 24 provincias; a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, quienes representan a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a un tercio de los miembros del Senado, que representan a ocho provincias.

Las fuerzas policiales de los ámbitos federal, provincial y municipal comparten la responsabilidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Todas las fuerzas policiales del nivel federal dependen del Ministerio de Seguridad, en tanto que las fuerzas provinciales y municipales dependen de un ministerio o secretaría dentro de su jurisdicción. Las autoridades civiles mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.

Entre los problemas notables de derechos humanos se incluyen los siguientes: ejecuciones ilícitas y arbitrarias y tortura por parte de la policía federal y provincial; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; problemas considerables en cuanto a la independencia judicial; serios actos de corrupción; violencia motivada por el antisemitismo; y trabajo forzoso, pese a las labores del gobierno para combatirlo.

Las autoridades judiciales acusaron formalmente y procesaron a algunos funcionarios y ex funcionarios públicos que cometieron abusos de derechos humanos durante el año, así como también a funcionarios que cometieron delitos durante la dictadura (1976-83).

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria de la vida y otras ejecuciones ilícitas o motivadas por cuestiones políticas

Hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes habían cometido homicidios arbitrarios o extrajudiciales.

El 6 de agosto, un policía provincial disparó a Valentino Blas Correas, de 17 años de edad, causando su muerte, cuando el conductor del vehículo en que se encontraba intentó evadir un puesto de control policial en la ciudad de Córdoba. Las autoridades arrestaron a un agente, Javier Catriel Almirón, por homicidio agravado y tentativa de homicidio, dado que el análisis balístico vinculó al disparo mortal con su arma de servicio.

En marzo, los fiscales confirmaron que procesarían a Esteban Armando Ramírez —policía de la ciudad de Buenos Aires— por homicidio preterintencional, tras causar la muerte de Jorge Martín Gómez. El momento en que Ramírez pateó a Gómez en el pecho durante el arresto en agosto de 2019 fue captado por cámaras de circuito cerrado. Como consecuencia de la patada, Gómez cayó, sufrió una fractura de cráneo y más tarde murió. Los medios de comunicación locales informaron que los agentes involucrados habían intentado encubrir sus acciones. Ramírez señaló que no había tenido la intención de matar a Gómez, pero los abogados de la víctima solicitaron que se incrementara el cargo a homicidio calificado, que supondría una posible cadena perpetua a diferencia de los uno a tres años de encarcelamiento que Ramírez enfrentaba por el cargo original. A noviembre el proceso estaba en curso.

El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (de la provincia de Buenos Aires) informó 134 muertes en 2019 debidas al uso injustificado o excesivo de la fuerza por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires. Una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Según ambas organizaciones, las investigaciones relativas al uso de fuerza letal y violencia policial en la provincia fueron limitadas.

Según medios de comunicación, hubo un incremento en los homicidios en la provincia de Santa Fe durante el año (se informaron 330 hasta finales de octubre,

en comparación con 279 durante el mismo período en 2019). Al igual que la prensa, algunas ONG (tales como InSight Crime) atribuyeron la elevada tasa de homicidios al narcotráfico y la delincuencia organizada. En septiembre, la ministra de seguridad de la Nación, Sabina Frederic, anunció que enviaría a 50 agentes federales para que respaldaran a la policía local. Sin embargo, las autoridades provinciales criticaron la medida considerándola insuficiente y solicitaron mayor coordinación con las autoridades federales y la asistencia de estas.

b. Desaparición

Durante el año hubo denuncias de desapariciones causadas por las fuerzas de seguridad o en su nombre.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril a aproximadamente 75 millas de su hogar mientras hacía dedo con dirección a Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), poco después de ser arrestado por la policía por infringir la cuarentena dispuesta debido a la COVID-19. Las autoridades hallaron el cuerpo de Astudillo en un canal cuatro meses después y la autopsia realizada por un equipo de antropología forense de renombre internacional no descartó que se hubiera tratado de un homicidio. Los fiscales señalaron a los medios de comunicación locales que los principales sospechosos eran oficiales de policía provinciales, pero al 18 de noviembre aún no se habían presentado cargos contra ninguno de ellos. El 10 de julio, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas exigió que las autoridades realizaran de inmediato una investigación exhaustiva. El 30 de octubre la madre de Astudillo denunció la lentitud de la investigación y solicitó que la jueza de instrucción a cargo del caso, María Gabriela Marrón, se recusara.

Las autoridades siguieron investigando y enjuiciando a los implicados en las desapariciones, asesinatos y torturas cometidos durante la dictadura militar de 1976-83 y durante el gobierno de Isabel Perón de 1974-76. Durante el año, los tribunales recibieron testimonios —por videoconferencia— relativos a dos megacausas por delitos cometidos durante la dictadura en la provincia de San Juan y en las instalaciones de Campo de Mayo cerca de Buenos Aires. En San Juan se presentaron cargos contra 35 personas; en el caso de Campo de Mayo, contra 22.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe dichas prácticas y estipula para la tortura penas similares a las dispuestas para el homicidio; sin embargo, se informó que hubo policías y

funcionarios correccionales que torturaron a los presos. La Procuración General de la Nación, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), una entidad gubernamental independiente que hace un seguimiento de las condiciones carcelarias, y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un ente autónomo establecido por el gobierno provincial de Buenos Aires —al igual que ONG nacionales e internacionales— informaron denuncias de tortura a manos de funcionarios correccionales provinciales y federales.

La PPN informó 427 casos de tortura o malos tratos en 2019. A junio la PPN registraba 87 casos. Si bien la PPN estableció un Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos en 2010, sus informes siguieron limitándose en gran medida a la ciudad y la provincia de Buenos Aires (que albergan a aproximadamente el 46% de la población).

El 25 de julio, en la comisaría sexta de La Plata (provincia de Buenos Aires), la policía golpeó y sometió a shocks eléctricos a un joven de 17 años durante su detención, estimada en 10 horas, según la CPM. La CPM señaló que aparentemente los agentes filmaron su accionar y distribuyeron el material en medios sociales.

El 13 de mayo las autoridades arrestaron a ocho miembros de la policía bonaerense por la tortura y abuso sexual de 14 mujeres detenidas en la comisaría tercera del partido de La Matanza. Según medios de comunicación locales, en diciembre de 2019 y enero de 2020, hubo policías que forzaron a las detenidas a desnudarse y sentarse en cuclillas por períodos prolongados y las sometieron a exámenes violentos e injustificados de las cavidades del cuerpo.

La impunidad de las fuerzas de seguridad a todos los niveles siguió siendo un problema importante. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos por investigar abusos. En general, las autoridades condenaron los abusos denunciados y realizaron labores a fin de capacitar a todos los niveles de las fuerzas armadas y de seguridad sobre derechos humanos (incluso mediante capacitación en línea durante la pandemia de la COVID-19).

Condiciones de las cárceles y los centros de detención

Las condiciones carcelarias fueron a menudo graves debido al hacinamiento, una atención médica deficiente y condiciones insalubres. Hubo denuncias de transferencias forzosas y el uso recurrente de la reclusión en régimen de

aislamiento como método de castigo, en especial en la provincia de Buenos Aires (que albergaba a más de la mitad de la población carcelaria del país).

Condiciones físicas: El hacinamiento carcelario siguió siendo un problema. Según la PPN, al 31 de julio el sistema penitenciario federal se encontraba al 95% de su capacidad (albergaba a alrededor de 11.500 reclusos). A abril, las penitenciarías provinciales de Buenos Aires albergaban a casi 42.100 reclusos en instalaciones originalmente diseñadas para 24.000, según el Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchos detenidos con prisión preventiva fueron alojados con reclusos condenados.

En marzo y abril, los reclusos en distintas partes del país organizaron revueltas mortales para manifestarse contra el hacinamiento y exigir que se les concediera el arresto domiciliario debido a la COVID-19. Tras las revueltas —a raíz de las cuales murieron siete reclusos diversos tribunales empezaron a conceder el arresto domiciliario a miles de detenidos en cárceles de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires a fin de reducir el hacinamiento y limitar la propagación del virus. Por lo general, los jueces priorizaron a los presos en categorías sanitarias de alto riesgo y a delincuentes no violentos.

El hacinamiento en los establecimientos para menores a menudo dio lugar a que se alojara en dependencias policiales a los menores detenidos, si bien algunas ONG y la Procuración Penitenciaria de la Nación señalaron la ilegalidad de dicha práctica.

En términos generales, las cárceles de mujeres fueron menos violentas y peligrosas —y estuvieron menos superpobladas— que los establecimientos para hombres. Las reclusas embarazadas estaban exentas de realizar trabajos y ejercicios físicos arduos y se las transfería a la clínica penitenciaria antes de la fecha de parto. Los niños que nacieron en la cárcel tuvieron derecho a permanecer con sus madres en un área especial de la penitenciaría y recibir servicio de guardería hasta los cuatro años de edad.

El Servicio Penitenciario Federal informó la muerte de 52 presos en cárceles federales hasta el 31 de octubre, 19 de las cuales fueron violentas. En cambio, según el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, 148 reclusos murieron en la provincia de Buenos Aires durante 2019 (118 de ellos por problemas de salud por los que no recibieron atención médica). El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no había publicado estadísticas nacionales oficiales sobre la muerte de reclusos desde 2016.

Según organizaciones de defensa de los derechos humanos y centros de investigación, en muchas de las instalaciones los reclusos también padecieron alimentación deficiente; tratamiento médico y psicológico inadecuado; saneamiento, calefacción, ventilación y luz deficientes; visitas de familiares restringidas, y frecuente trato degradante.

En diciembre de 2019, un tribunal penal declaró culpables de abandono de persona al exjefe Alberto Donza y a cinco otros oficiales, por la muerte de detenidos en un incendio en 2017 en la seccional primera de Pergamino (provincia de Buenos Aires). Donza recibió una condena de 15 años y los otros oficiales de policía recibieron condenas de entre 6 y 14 años de prisión.

Administración: A veces, las autoridades efectuaron investigaciones de denuncias verosímiles de maltrato. Según ONG locales, en algunas ocasiones los reclusos no presentaron denuncias ante las autoridades por temor a represalias.

Vigilancia independiente: Por lo general, el gobierno permitió la vigilancia de parte de observadores de derechos humanos independientes, tanto nacionales como internacionales.

d. Arresto o detención arbitrarios

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y estipula el derecho de toda persona a cuestionar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El gobierno generalmente cumplió estos requisitos.

Procedimientos de arresto y trato de los detenidos

En términos generales, la policía aprehendió abiertamente a personas, con órdenes de detención basadas en pruebas suficientes y expedidas por un funcionario debidamente autorizado. Conforme a la legislación, la policía puede demorar a sospechosos por un máximo de 6 horas sin una orden de detención si las autoridades poseen sospechas debidamente fundadas de que han cometido o están a punto de cometer un delito o si la policía no está en condiciones de establecer la identidad del sospechoso. En todos los casos, las autoridades deben notificar el arresto de inmediato al ministerio público fiscal. El ministerio público fiscal puede aprobar una detención de hasta 72 horas. En casos excepcionales, un juez puede prorrogar la detención por 72 horas adicionales. Según grupos de defensa de los derechos humanos, la policía ocasionalmente realizó arrestos arbitrarios y demoró

a los sospechosos por un tiempo superior al que permite la ley o no respetó los procedimientos de notificación apropiados.

La ley establece que el detenido tiene derecho a que un juez de garantías determine rápidamente la legalidad de su detención y decida si se prosigue o no con una investigación. En algunos casos hubo demoras en este proceso y en informar a los detenidos sobre los cargos en su contra.

La ley contempla el derecho a una fianza excepto cuando existe riesgo de fuga o de obstaculizar la acción de la justicia.

Las autoridades permitieron que los detenidos accedieran rápidamente a un abogado y nombraron defensores públicos para los detenidos que no podían solventar dicho servicio. En algunos casos dicho acceso se demoró debido a la sobrecarga del sistema judicial.

Arresto arbitrario: Según ONG locales, hubo ocasiones en que la policía arrestó y detuvo a ciudadanos en forma arbitraria.

El 19 de agosto la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a tres vendedores callejeros afrodescendientes por vender mercancías falsificadas. Ciertos grupos locales que representan a los trabajadores informales denunciaron que los arrestos habían sido innecesarios y que habían entrañado el empleo de fuerza excesiva. En marzo de 2019, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana de la ONU señaló que, según las informaciones recogidas, los migrantes afrodescendientes —especialmente los vendedores callejeros— eran objeto de arrestos arbitrarios y violencia policial. También hubo organizaciones de derechos humanos que acusaron a las fuerzas policiales de realizar arrestos arbitrarios, supuestamente como resultado de una cuarentena nacional (que empezó el 20 de marzo y finalizó por etapas el 8 de noviembre) para afrontar la COVID-19. Las organizaciones acusaron a la policía de no registrar los arrestos, tratar a los arrestados con fuerza excesiva y albergar a los detenidos en espacios donde su salud se veía amenazada.

El 16 de agosto algunos testigos filmaron el momento en que cinco policías arrestaban violentamente a una mujer que paseaba a su perro en Bariloche infringiendo la cuarentena. Los policías señalaron a la prensa local que la mujer los había insultado tras negarse a acceder a varios pedidos de que regresara a su hogar. Más tarde el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, anunció que se llevaría adelante una investigación por posible empleo de fuerza excesiva.

Detención preventiva: La ley dispone la detención preventiva por un máximo de dos años para las personas imputadas que se encuentran a la espera o en proceso de juicio; el período se puede extender hasta un año más en determinadas circunstancias. La lentitud del sistema judicial con frecuencia dio lugar a detenciones prolongadas que excedieron el período estipulado por la ley. La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que, durante los primeros seis meses del año, el 53% de los detenidos estaba a la espera de juicio.

e. Denegación de juicio público imparcial

La legislación dispone la independencia del poder judicial; sin embargo, hubo funcionarios gubernamentales —de todos los niveles— que no siempre respetaron la independencia e imparcialidad judicial. Conforme a ONG locales, algunos jueces del fuero penal federal y de la justicia federal ordinaria fueron objeto de manipulación política en algunas ocasiones.

Procedimientos judiciales

La legislación dispone el derecho a un juicio imparcial y público; y un poder judicial independiente en general hizo respetar este derecho.

Los acusados gozan de la presunción de inocencia y tienen derecho a asesoramiento jurídico y a la asistencia sin costo alguno de un intérprete, a permanecer en silencio, a llamar a comparecer a testigos para su defensa y a apelar. De ser necesario, se designa un defensor público cuyos gastos son solventados por el Estado. En los juicios orales, los acusados pueden presentar testigos y solicitar testimonios periciales. Los acusados tienen derecho a estar presentes en las audiencias y no existe el juicio en ausencia.

El sistema judicial se vio obstaculizado por demoras prolongadas, estancamiento procesal, largas demoras en la designación de jueces permanentes, apoyo administrativo deficiente e ineficiencia general. La amplia discrecionalidad de los jueces para determinar el curso y la forma de las investigaciones contribuyó a la percepción pública de arbitrariedad en muchas decisiones.

El código procesal penal federal aprobado en 2018 reemplazó el sistema federal híbrido inquisitivo con un sistema completamente acusatorio. En junio de 2019 Salta y Jujuy se convirtieron en las primeras provincias en aplicar este sistema acusatorio a nivel federal (que se prevé se amplíe de manera gradual al resto del

país). En general el nuevo código dispone que los casos se lleven a juicio dentro de un plazo de un año y sean resueltos dentro de los tres años. También incorpora el uso de nuevas técnicas de investigación y amplía los derechos de las víctimas. Según fiscales de provincias que aplicaban el nuevo código, casos que anteriormente requerían años ahora podían resolverse en meses. El código transfiere la responsabilidad por la investigación de los jueces a los fiscales, con la asistencia de las fuerzas de seguridad. La plena aplicación de los procedimientos previstos para los juicios por jurados estaba pendiente en Corrientes y San Juan. Las provincias de Neuquén, Mendoza, Salta, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Río Negro y Buenos Aires conceden a los acusados de ciertos delitos graves el derecho a un juicio por jurado. A octubre no había juicios por jurados para casos federales.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de que hubiera presos o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para presentar demandas por daños y perjuicios o para solicitar el amparo de derechos consagrados en la constitución. También pueden apelar decisiones adversas en el país o ante organismos de derechos humanos regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Restitución de bienes

El país ratificó la Declaración de Terezín de 2009, en que se hace un llamamiento a los países a facilitar la restitución de bienes incautados ilegalmente durante el Holocausto, a brindar acceso a archivos y a promover la educación sobre el Holocausto y su recordación. No se conocieron reclamos relativos a bienes muebles o inmuebles en el país, que no cuenta con legislación en materia de restitución. La Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la República Argentina, creada en 1997, concluyó que no había arte proveniente de saqueos en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, la comisión admitió que no había verificado ningún otro museo estatal y que enfrentó dificultades para investigar las actividades del mercado del arte en el país durante el Holocausto. El informe del Departamento de Estado al Congreso en virtud de la Ley de justicia hoy para las víctimas no compensadas (JUST, por sus siglas en inglés), presentado al público el 29 de julio, puede consultarse en el sitio web del

Departamento de Estado: <https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/>.

f. Injerencia arbitraria o ilícita en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La constitución prohíbe tales actos y no hubo informes de que el gobierno no haya respetado estas prohibiciones.

El 28 de agosto, un juez federal anunció una investigación oficial por espionaje ilegal durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y citó a los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros funcionarios. Se acusaba a los miembros de la AFI de vigilancia ilegal de las actividades y comunicaciones privadas de políticos (del partido gobernante y de la oposición), periodistas, dirigentes sindicales y referentes religiosos. A noviembre la investigación seguía en curso.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión, incluida la libertad de prensa

La constitución dispone la libertad de expresión, incluida la de prensa y en general el gobierno respetó este derecho. Una prensa independiente y un sistema político democrático se combinaron para fomentar la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa.

Libertad de prensa y medios de comunicación, inclusive la prensa en línea: Los medios de comunicación independientes estuvieron activos y expresaron una amplia gama de opiniones sin restricciones.

En octubre el gobierno anunció su intención de crear el Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (NODIO). La Sociedad Interamericana de Prensa, medios de comunicación y la asociación nacional de periodistas expresaron su preocupación por que NODIO funcionara como un instrumento extrajudicial al que el gobierno podría recurrir para restringir la libertad de expresión o regular a los medios de comunicación.

En julio de 2019, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación luego de que un juez federal ordenara comparecer a Daniel Santoro (del diario *Clarín*) y obtuviera su registro de

llamadas telefónicas en relación con una investigación. Las denuncias guardaban relación con los contactos de Santoro con Marcelo D'Alessio, acusado de extorsión tras amenazar a otras personas con cobertura negativa en los medios de comunicación. Santoro afirmó que D'Alessio era una fuente periodística. En abril, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, también criticó el procesamiento de Santoro, diciendo que los periodistas “no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”. En octubre, el mismo juez acusó a Santoro de ser parte de una “asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal” y de realizar “acciones de inteligencia prohibidas”. La coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, se expresó en contra de los cargos, haciendo hincapié en que responsabilizar a los periodistas por las acciones de sus fuentes sienta un precedente perturbador que abre las puertas a cargos penales contra periodistas de investigación que trabajan para descubrir delitos. Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condenaron los últimos cargos contra Santoro como un intento de criminalizar el periodismo.

Violencia y acoso: Hubo informes de ataques físicos, amenazas y acoso dirigidos a periodistas.

En junio, FOPEA y ADEPA expresaron inquietud acerca de las revelaciones de que la AFI podría haber espiado ilegalmente a periodistas durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. FOPEA afirmó que la AFI había intimidado en forma activa a periodistas e interferido en su labor.

En junio, FOPEA y ADEPA criticaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por compartir un video en Twitter que procuraba desacreditar a periodistas que investigaban casos de corrupción de alto nivel. Las organizaciones advirtieron que tal campaña podría fomentar el acoso público y en línea contra los periodistas.

FOPEA había informado sólo un supuesto ataque físico contra periodistas a septiembre, en comparación con 27 el año anterior. En julio manifestantes atacaron a un equipo de la cadena de televisión C5N que cubría una protesta contra el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Dos miembros del equipo sufrieron lesiones y los manifestantes rompieron las ventanillas de uno de sus vehículos.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet ni censuró contenido en internet y no hubo informes fidedignos de vigilancia gubernamental de las comunicaciones privadas por internet sin la debida autorización legal.

Libertad académica y actos culturales

El gobierno no impuso restricciones a la libertad académica ni a los actos culturales.

b. Libertades de reunión y de asociación pacíficas

La constitución estipula las libertades de reunión y de asociación pacíficas y el gobierno generalmente respetó estos derechos.

En respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID-19, un decreto presidencial del 19 de marzo impuso restricciones a la capacidad de reunión de las personas (incluso para la protesta pacífica). No obstante, se realizaron varias protestas a gran escala contra el gobierno tanto en Buenos Aires como en otros puntos del país, sin incidentes, luego del establecimiento de dichas restricciones.

En ocasiones la policía empleó la fuerza para dispersar a los manifestantes. Según medios de comunicación locales, el 10 de abril la policía dispersó con balas de goma y bastones una manifestación de 300 trabajadores de un frigorífico en el municipio bonaerense de Quilmes. Los manifestantes exigían que se les pagaran las semanas de trabajo adeudadas tras el cierre del frigorífico debido a las restricciones sanitarias.

El 21 de septiembre la policía empleó violencia contra enfermeros que protestaban y pedían mejores salarios y condiciones laborales frente a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, según la prensa local. Los voceros de la policía señalaron que los enfermeros habían intentado ingresar al edificio por la fuerza.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto en el mundo (*International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación

La constitución dispone la libertad de circulación dentro del país y para los viajes al exterior, la emigración y la repatriación; en general el gobierno respetó estos derechos.

e. Condición y trato de los desplazados internos

No es aplicable.

f. Protección de refugiados

El gobierno colaboró con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, los refugiados que regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas de interés.

Acceso a asilo: La ley contempla la concesión de asilo o de la condición de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. La resolución de los pedidos de asilo puede llevar hasta dos años.

A septiembre, la Organización Internacional para las Migraciones había informado que 32.911 venezolanos habían llegado al país durante el año. De estos, más de 31.000 solicitaron la residencia temporal. La Comisión Nacional para los Refugiados recibió 3.184 solicitudes de condición de refugiado en 2019 (aproximadamente un 20% más que en 2018) y resolvió 1.680.

Como resultado de la pandemia de COVID-19 y las consiguientes restricciones a la libertad de circulación y asociación, muchos refugiados y migrantes perdieron sus trabajos y medios de subsistencia, según el representante regional del ACNUR. Muchos migrantes no tuvieron acceso a programas sociales nacionales, dado que no contaban con la documentación necesaria o no cumplían con los requisitos establecidos. En mayo el ministro de Desarrollo Social, el representante regional del ACNUR y el presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados firmaron un memorando de entendimiento para mejorar la inclusión socioeconómica de migrantes y refugiados en el país. Mediante un nuevo grupo de trabajo interinstitucional, el ACNUR y las autoridades locales entregaron kits de alimentos y productos de higiene y limpieza a refugiados en el área metropolitana de Buenos Aires.

Sección 3. Libertad de participar en el proceso político

La constitución concede a los ciudadanos la facultad de escoger su gobierno en elecciones periódicas libres e imparciales celebradas por votación secreta y basadas en el sufragio universal e igualitario.

Elecciones y participación política

Elecciones recientes: Alberto Fernández fue elegido presidente en octubre de 2019, en elecciones consideradas en términos generales como libres e imparciales. El país también celebró elecciones municipales, provinciales y nacionales. Los votantes eligieron a la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados, quienes representan a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y a un tercio de los miembros del Senado, que representan a ocho provincias. Los votantes también eligieron a los gobernadores de 22 provincias, así como también a legisladores provinciales, intendentes y concejales. Los observadores nacionales e internacionales consideraron que, en términos generales, las elecciones fueron libres e imparciales.

Participación de la mujer y de miembros de grupos minoritarios: Ninguna ley limita la participación de la mujer ni de miembros de grupos minoritarios en el proceso político, y ambos participaron. Según un estudio de diciembre de 2019 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, las mujeres alcanzaron un récord de 37,7% de altos cargos públicos: 106 miembros (el 41%) de la Cámara de Diputados en 2019-21 fueron mujeres (un incremento del 3% con respecto al nivel alcanzado en 2017-19). La composición del Senado en cuanto al género se mantuvo, con 29 senadoras (alrededor del 40% de la Cámara Alta). En las provincias la participación de la mujer fue desigual y las autoridades nacionales reconocieron que aún no se ha alcanzado la paridad de género en los cargos políticos en todo el país. Conforme a la legislación, las listas electorales de candidatos que se postulen a cargos legislativos nacionales deben tener igual porcentaje de candidatos hombres y mujeres. La legislación también dispone que, en caso de renuncia, ausencia temporal o muerte de un funcionario elegido, quien lo reemplace debe ser de su mismo sexo. Las provincias de Buenos Aires, Salta, Chubut, Neuquén y Santa Fe cuentan con leyes de paridad de género en relación con los candidatos que se postulan para ocupar cargos en órganos provinciales y municipales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La ley establece sanciones penales en el caso de corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, según muchos informes, funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial participaron en prácticas corruptas impunemente, lo que sugiere que la ley no se implementó con eficacia. Las instituciones débiles y un sistema judicial con frecuencia ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos por controlar la corrupción.

Corrupción: A octubre se encontraban en curso algunas investigaciones relativas a casos de corrupción contra figuras políticas de alto rango actuales y del pasado (entre ellas, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri). En septiembre de 2019 un juez federal elevó a juicio el escándalo de corrupción conocido como “la causa de los cuadernos”. Se acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otras 52 personas de recibir sobornos, pagarlos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, cuando Fernández de Kirchner era presidenta. Los fiscales calcularon el valor total del sistema de sobornos en US \$160 millones. A noviembre, Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaban otras cinco causas por corrupción financiera. Según medios de comunicación locales, funcionarios judiciales indicaron que, debido a las demoras relativas a la pandemia, los juicios por algunos de estos casos se retrasarían por lo menos hasta fines de 2021.

En marzo, un tribunal federal ordenó liberar de la cárcel al ex ministro de Planificación, Julio De Vido. De Vido había cumplido dos años en detención preventiva por varios cargos de corrupción en su contra y los jueces determinaron que su liberación no amenazaría las investigaciones. En 2018, De Vido había sido condenado a cinco años y ocho meses por fraude, malversación de fondos y falta de supervisión en relación con un accidente ferroviario ocurrido en 2012 en el que fallecieron 52 personas. A septiembre, dicha condena seguía bajo la consideración de la Cámara Federal de Casación Penal. De Vido también afrontaba cargos en la causa de los cuadernos y en otras relacionadas con su gestión de proyectos de obras públicas.

Hubo corrupción en algunas fuerzas de seguridad. Entre los abusos más frecuentes cabe citar la extorsión y la protección de los implicados en casos de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y promoción de la prostitución. Las denuncias de corrupción tanto en los tribunales provinciales como federales también fueron frecuentes.

Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a las leyes de divulgación de información patrimonial; y la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de analizar e investigar a los funcionarios del poder ejecutivo nacional, en función de sus declaraciones juradas de bienes. La ley dispone la divulgación pública, pero no todas las entidades procedieron de esta manera y el cumplimiento siguió siendo un problema. La Oficina Anticorrupción también es responsable por investigar la corrupción dentro del poder ejecutivo nacional y en asuntos relacionados con fondos federales, con excepción de los fondos transferidos a las provincias. Al ser parte del poder ejecutivo, la oficina no está facultada para entablar acciones judiciales en forma independiente, pero puede remitir casos a otras dependencias o constituirse en demandante y solicitar a un juez que inicie una causa.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos de los derechos humanos

En general, diversos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron sin restricciones por parte del gobierno e investigaron y publicaron sus conclusiones en casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales usualmente cooperaron y, en general, se mostraron receptivos a sus opiniones.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: El gobierno cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos, que integra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su objetivo principal es la coordinación dentro del ministerio y la colaboración con otros ministerios y el poder judicial para propiciar políticas, planes y programas para la protección de los derechos humanos. La secretaría publicó folletos y libros sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos.

Según organizaciones no gubernamentales, el que el gobierno no haya cubierto el cargo de defensor del pueblo del ámbito nacional —que ha estado vacante desde 2009— socavó el mandato de la oficina de proteger los derechos humanos.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad investigó y documentó abusos de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura militar de 1976-83.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La violación de hombres y mujeres, incluida la violación conyugal, es un delito. Las penas van de 6 meses a 20 años de cárcel, según las edades del agresor y de la víctima, su relación y el uso de violencia, entre otros factores. La mayoría de los agresores recibieron condenas de entre 6 y 15 años de cárcel. Hubo informes anecdóticos de renuencia policial o judicial a actuar en casos de violación. Defensores de los derechos de la mujer señalaron que las actitudes de policías y en hospitales y tribunales hacia las sobrevivientes de violencia sexual a veces las revictimizaban (a menudo se las forzaba a narrar detalles del trauma, se equiparaba el silencio con el consentimiento o se admitía su vida sexual pasada entre las pruebas).

La ley prohíbe la violencia doméstica, incluido el maltrato conyugal. Las sobrevivientes pueden obtener medidas de protección. Por lo general se cumplió con la ley, y en términos generales las sobrevivientes tuvieron acceso a medidas de protección. La ley impone una pena más dura que la prevista para el asesinato a quienes matan a sus cónyuges, parejas o hijos debido a su género. Según ONG locales, la falta de vigilancia policial y judicial con frecuencia dio lugar a la desprotección de las víctimas. La legislación dispone que todos los empleados federales reciban capacitación sobre género y sobre violencia de género. La ley se cumplió, incluso respecto de funcionarios del gabinete y el presidente.

El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registró 268 casos de muertes de mujeres como resultado de violencia doméstica o por razón de género en 2019. Al 31 de julio la Defensoría del Pueblo de la Nación había informado la muerte de 168 mujeres como consecuencia de actos de violencia. Alrededor del 17% de estas víctimas habían presentado denuncias formales previamente. En agosto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad señaló que los informes de violencia de género habían aumentado aproximadamente un 28% durante la cuarentena por la COVID-19.

En junio el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó un plan nacional de dos años contra la violencia de género, que incluyó una propuesta de asignación presupuestaria. El ministerio también mantuvo una línea telefónica —que funcionaba las 24 horas— para víctimas de violencia de género y creó canales de contacto de emergencia en WhatsApp y por correo electrónico para aquellas

víctimas que no podían hablar por teléfono. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación brindó recursos y protección las 24 horas a víctimas de violencia doméstica. La oficina también realizó las evaluaciones del riesgo necesarias para la obtención de órdenes de restricción perimetral. Instituciones públicas y privadas ofrecieron programas de prevención y brindaron apoyo y tratamiento a mujeres víctimas de abuso. La red nacional de refugios contaba con 89 instalaciones, si bien el gobierno había previsto construir alrededor de 30 más para 2019. En agosto el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó un programa nacional para fortalecer las capacidades en estos refugios. La Ley Brisa de 2018 dispone que se otorgue ayuda financiera a los menores que perdieron a sus madres como resultado de la violencia de género; sin embargo, muchas familias denunciaron demoras en la entrega del pago. A diciembre de 2019, alrededor de 345 menores y jóvenes habían recibido apoyo mediante el programa. No obstante, al 20 de julio ese número casi se había duplicado a 623; las autoridades señalaron que habían hecho especial énfasis en el programa.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en el sector público e impone medidas disciplinarias o correctivas. En algunas jurisdicciones, como la ciudad de Buenos Aires, el acoso sexual puede derivar en el despido del acosador, mientras que, en otras, como la provincia de Santa Fe, la pena máxima es de cinco días de cárcel. No se prohíbe el acoso sexual laboral en términos más amplios.

El 16 de abril el Senado aprobó una ley que castiga el acoso en el espacio público, considerándolo como un tipo de violencia de género.

Coacción en el control de la población: No se informaron abortos forzados ni esterilizaciones involuntarias de parte de las autoridades del gobierno.

Discriminación: La constitución concede la misma condición jurídica y derechos a hombres y mujeres y prohíbe la discriminación laboral por motivos de género. En general el gobierno garantizó el cumplimiento de la ley, si bien la discriminación siguió siendo un problema persistente y extendido en la sociedad.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación capacitó a jueces, secretarios y empleados judiciales en el manejo de causas judiciales relacionadas con temas de género y para garantizar el acceso igualitario de la mujer a cargos en el sistema judicial. La oficina también capacitó a jueces, fiscales, personal judicial y agentes del orden para concientizar sobre delitos de género y formular técnicas para tratar casos de género y asistir a las víctimas.

Las mujeres no pueden trabajar en todas las mismas industrias que los hombres; hay restricciones en cuanto al empleo de la mujer en los sectores minero, fabril y del transporte. También hay restricciones al trabajo de la mujer en actividades consideradas peligrosas o arduas. El 11 de noviembre, el Congreso ratificó el Convenio núm. 190 sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Estaba previsto que el convenio entrara en vigor en junio de 2021.

En agosto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió una resolución que dispone que las organizaciones de la sociedad civil y las empresas deben respetar la paridad de género en la composición de sus directorios. De conformidad con la resolución, al menos un tercio de los miembros de los órganos administrativos y de supervisión de las organizaciones deben ser mujeres.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: El gobierno ofrece la inscripción universal de nacimientos y la ciudadanía se adquiere tanto por nacimiento en el territorio nacional como a través de los padres. Los padres cuentan con 40 días para inscribir el nacimiento y el Estado cuenta con otros 20 días para hacerlo. El Ministerio del Interior puede expedir partidas de nacimiento a los niños menores de 12 años cuyo nacimiento no fue previamente inscrito.

Maltrato infantil: Conforme a la legislación, el abuso sexual de menores es un delito que entraña condenas de hasta 20 años de encarcelamiento. Causar daños físicos a un menor puede entrañar condenas de hasta 15 años en prisión. El maltrato infantil fue común; la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que aproximadamente el 30% de las denuncias recibidas entre el 20 de marzo y el 17 de julio (el período más estricto de la cuarentena dispuesta debido a la COVID-19) fueron relativas a menores. El gobierno mantuvo una línea telefónica para consultas y asesoramiento gratuitos, atendida por psicólogos profesionales de la infancia, que funcionó las 24 horas.

Matrimonio infantil, a edad temprana y forzado: Los menores de más de 16 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Los menores de menos de 16 años deben obtener una autorización judicial además del consentimiento de sus padres.

Explotación sexual de menores: La ley prohíbe la explotación sexual comercial de menores y la venta, ofrecimiento o suministro de menores para prostitución. En general las autoridades garantizaron el cumplimiento de la ley; sin embargo, la explotación sexual de menores —incluso mediante la prostitución— fue un problema. La edad mínima de consentimiento sexual es 13 años, si bien las leyes brindan mayor protección para los menores de entre 13 y 16 años. Existe una ley de delitos contra la integridad sexual con penas que van de 6 meses a 20 años de cárcel, según la edad de la víctima y otros factores.

En junio comenzó un juicio a dos monjas y siete exempleados de un grupo de escuelas para menores hipocásicos (los institutos Antonio Próvolo). Se informó que 67 estudiantes habían denunciado abusos cometidos entre 1983 y 2002. Esto, tras las condenas de noviembre de 2019 a dos exsacerdotes de la escuela, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, declarados culpables de abuso sexual de menores y condenados a 42 y 45 años de cárcel, respectivamente.

La ley prohíbe la producción y distribución de toda representación de un menor en actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, con penas que van desde 6 meses hasta 4 años de cárcel. La posesión de estas representaciones es un delito penal.

En el transcurso del año, los fiscales de la Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil en Internet, entidad de alcance nacional, intervinieron en este tipo de casos. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuó como principal punto de contacto para recibir pistas provistas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) sobre explotación sexual de menores en material pornográfico y transmitirlos a los fiscales y fuerzas policiales de todo el país. El Ministerio Público de la Defensa de Buenos Aires informó un incremento del 30% interanual en denuncias de producción y distribución de imágenes de explotación sexual de menores durante el período de dos meses entre el 19 de marzo y el 18 de mayo, que coincidió con los primeros 60 días de las medidas de confinamiento a nivel nacional en respuesta a la COVID-19.

En septiembre la Policía Federal arrestó a ocho personas tras una serie de allanamientos (en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Salta, Córdoba y Río Negro) dirigidos a una red explotación sexual de menores en material pornográfico que contaba con, al menos, 406 suscriptores en el país y más de 1.700 en el resto del mundo. Los allanamientos se efectuaron luego de que la Policía Federal investigara a la banda durante tres años.

En septiembre de 2019, las autoridades locales arrestaron al ex policía Rodolfo Suárez por su participación en una red de explotación sexual de menores en material pornográfico, que se calcula victimizó a 1.200 menores de entre cuatro meses y 14 años de edad desde 2003. El hombre atraía a sus víctimas fingiendo ser productor de programas de televisión para jóvenes. En agosto un juez de la ciudad de Buenos Aires elevó a juicio el caso de Suárez.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (*Annual Report on International Parental Child Abduction*) en <https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html>.

Antisemitismo

Las estimaciones relativas al tamaño de la comunidad judía variaron, pero conforme a los datos más recientes disponibles —publicados por Berman Jewish Databank— la población era de 180.300 en 2018. Continuaron los actos esporádicos de discriminación y vandalismo antisemita. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) registró 918 denuncias de antisemitismo en 2019, en comparación con las 834 recibidas en 2018 (un incremento del 10%). Los incidentes de antisemitismo con mayor cantidad de denuncias registrados en el informe fueron insultos publicados en diversos sitios web, a menudo en relación con artículos periodísticos. Entre otros incidentes, cabe mencionar los grafitis e insultos proferidos oralmente.

El 4 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto emitió una resolución mediante la cual adoptó la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (AIMH) en el poder ejecutivo. La resolución invitó a los otros poderes y niveles del gobierno a unirse y adoptar la definición de la AIMH.

El 1 de abril el periodista televisivo Tomás Méndez vinculó el origen de la COVID-19 con "los ricos del mundo" nacidos en los Estados Unidos e Israel, durante su programa *Periodismo Federal*. La DAIA y el embajador de Israel, entre otros, criticaron los comentarios, y el Instituto Nacional contra la Discriminación,

la Xenofobia y el Racismo iniciaron una investigación oficial por antisemitismo. El 2 de abril Méndez se disculpó públicamente por sus comentarios.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
<https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

Personas con discapacidades

La constitución y la ley prohíben la discriminación de personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales. En general el gobierno garantizó el cumplimiento de la ley, pero hubo algunos informes aislados de discriminación. Varias entidades públicas ofrecieron diversos servicios y programas a personas con discapacidades (como, por ejemplo, programas comunitarios de rehabilitación, instalaciones deportivas y recreativas, servicios de traducción en braille, servicios legales, y distintas pensiones y subsidios). La ley también estipula que los edificios sean accesibles para las personas con discapacidades. Según un informe de 2016 del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, solo el 33% de las estaciones del subterráneo metropolitano tenían ascensores o escaleras mecánicas. Si bien la ciudad trabajó para instalar nuevos ascensores y escaleras mecánicas y reparar los existentes, el defensor del pueblo de la ciudad visitó varias de las nuevas estaciones de subterráneo en julio de 2019 y constató que varios de los ascensores no funcionaban.

Con la consigna "basta de esterilizaciones forzadas", varias organizaciones de derechos humanos lanzaron una campaña en octubre para enmendar una ley que sostenían había llevado a la esterilización de muchas personas con discapacidades sin su consentimiento. La ley fue redactada a fin de brindar a todos los ciudadanos acceso a ciertas medidas anticonceptivas quirúrgicas, pero permite que los representantes legales consientan en nombre de cualquier persona declarada incapacitada judicialmente. Las organizaciones explicaron que esta laguna, sumada a la amplia aceptación social de la esterilización forzosa de personas con discapacidades, había llevado al uso extendido de la práctica.

Si bien el gobierno nacional contaba con leyes protectoras, muchas provincias no las habían adoptado y carecían de mecanismos para garantizar su aplicación. Una ley sobre cupos laborales reserva el 4% de los puestos de trabajo en el gobierno nacional para personas con discapacidades. Según datos del Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INDEC), en 2018 se calculaba que solamente el 32% de las personas con discapacidades en edad de trabajar tenían empleo.

En 2019 el Congreso propuso y aprobó un incremento presupuestario del 56% para la Agencia Nacional de Discapacidad, que brinda diversos servicios y subsidios a personas con discapacidades. En marzo, el gobierno brindó fondos adicionales a la agencia para garantizar que se satisficieran las necesidades de las personas con discapacidades durante la pandemia de la COVID-19. Si bien el gobierno hizo excepciones a las restricciones de la cuarentena para asistir a personas con discapacidades, no hubo excepciones para brindar educación apropiada a los menores con discapacidades.

Pueblos originarios

La constitución reconoce las identidades étnicas y culturales de los pueblos indígenas y establece que corresponderá al Congreso garantizar su derecho a la educación bilingüe, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales, y asegurar su participación en la gestión de los recursos naturales propios.

En un estudio realizado durante el año por investigadores de ocho universidades se analizó la situación de 27 grupos indígenas y se determinó que era más probable que los indígenas estuvieran empleados informalmente que el público en general (el 70% comparado con el 44%). El estudio señaló que a menudo los indígenas no tenían acceso a programas sociales en las zonas aisladas donde muchos de ellos vivían y que estas comunidades carecían de infraestructura básica (incluso, de agua limpia).

La falta de docentes capacitados obstaculizó las labores del gobierno para ofrecer oportunidades educativas bilingües a los pueblos originarios.

No se consultó plenamente a los pueblos originarios con respecto a la gestión de sus tierras o recursos naturales (especialmente el litio), en parte porque la responsabilidad de aplicar la ley se encuentra delegada a las 23 provincias, de las cuales sólo 11 reconocen los derechos de los pueblos originarios en sus constituciones.

Hubo proyectos de las industrias agrícola y extractiva que causaron el desplazamiento de personas, limitaron su acceso a medios tradicionales de subsistencia, redujeron la superficie de las tierras de las que dependían y causaron

contaminación que, en algunos casos, puso en peligro la salud y el bienestar de las comunidades indígenas. Se generaron conflictos cuando las autoridades desalojaron a pueblos originarios de tierras ancestrales, en dicho momento bajo propiedad privada.

Medios locales informaron que el 31 de mayo la policía provincial había ingresado violentamente a tres hogares propiedad de miembros de la comunidad Qom en Fontana (provincia de Chaco). Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, muchos de los agentes vestían de civil y no contaban con una orden de registro. La policía arrestó a cuatro personas tras una confrontación física (entre ellos, una joven de 16 años) y luego siguieron insultándolos, amenazándolos y torturándolos en la comisaría. Un juez los liberó el 8 de julio, tras determinar que el registro de los hogares había sido ilegal y humillante. A noviembre seguían pendientes los casos contra cuatro agentes.

Actos de violencia, tipificación y otros abusos sociales motivados por la orientación sexual y la identidad de género

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT registró 177 denuncias oficiales de crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en 2019. Esto representó aproximadamente un incremento del 20% con respecto a 2018, e incluyó el asesinato de 16 personas LGBTI.

Las leyes nacionales contra la discriminación no incluyen específicamente los términos “orientación sexual” o “identidad de género” como motivos protegidos, sino solo “sexo”. Sin embargo, no hubo informes de discriminación oficial por razón de la orientación sexual o la identidad de género en el empleo ni la vivienda ni el acceso a la educación. Hubo algunos casos de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género en el acceso a servicios de salud. Funcionarios del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, al igual que medios de comunicación y ONG, informaron casos de discriminación, violencia y brutalidad policial contra personas LGBTI (en particular, contra las personas transgénero).

En agosto ese ministerio y el ministro de Salud expresaron preocupación acerca de que la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular no permitiera a miembros de la comunidad LGBTI donar sangre debido a su orientación sexual. En agosto no se permitió a Emiliano Ivaldi, un paciente recuperado de COVID-19, donar plasma en el Hospital Eva Perón en la provincia

de Santa Fe. Las autoridades hospitalarias justificaron la decisión en el hecho de que Ivaldi era homosexual.

El 4 de septiembre el presidente Fernández emitió un decreto en virtud del cual al menos el 1% de los puestos en la administración pública deben ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. El 15 de septiembre el Senado adoptó un decreto similar para reglamentar sus propias prácticas de contratación.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley dispone el derecho de los trabajadores a formar sindicatos independientes y afiliarse a ellos, a negociar colectivamente y a realizar huelgas legales; el gobierno por lo general respetó estos derechos. La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y protege a los trabajadores del despido, la suspensión y los cambios en las condiciones laborales. La ley también prohíbe al personal militar y policial formar sindicatos y afiliarse a ellos. El gobierno hizo cumplir la legislación con eficacia y las penas fueron equiparables a las de otras leyes en materia de denegación de derechos civiles (como la discriminación). Las prácticas laborales desleales pueden denunciarse ante el poder judicial. Infringir la ley puede dar lugar a multas para el empleador o la asociación patronal pertinente, según corresponda. Hubo casos de importantes demoras o apelaciones en el proceso de negociación colectiva.

La ley permite a los sindicatos inscribirse sin autorización previa y las organizaciones sindicales inscritas pueden realizar ciertas actividades para representar a sus afiliados, como peticionar a las autoridades gubernamentales y a los empleadores. La ley reconoce la condición de sindicato oficial sólo a un sindicato considerado el “más representativo”, definido por ley como el sindicato que cuente con la mayor proporción, en promedio, de afiliados cotizantes sobre la cantidad de trabajadores representados, por sector industrial dentro de una determinada región geográfica. Únicamente los sindicatos con dicho reconocimiento oficial gozan de inmunidad sindical para sus representantes en cuanto a represalias por parte de los empleadores, tienen permitido deducir los aportes sindicales directamente de los salarios y pueden negociar colectivamente, con acceso a la conciliación y el arbitraje. El sindicato más representativo negocia en nombre de todos los trabajadores de un determinado sector; y los acuerdos colectivos alcanzan por igual a afiliados y no afiliados al sindicato del sector.

Conforme a la legislación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe ratificar los acuerdos de negociación colectiva.

La Central de los Trabajadores de la Argentina y otros grupos laborales no afiliados a la Confederación General del Trabajo siguieron sosteniendo que el reconocimiento legal de sólo un sindicato por sector contradecía las normas internacionales —concretamente el Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— e impedía que estos sindicatos obtuvieran la plena personería jurídica. Un fallo de la Corte Suprema del 3 de septiembre ratificó la constitucionalidad de la legislación.

Los empleados públicos y los trabajadores en servicios esenciales pueden declararse en huelga sólo al cabo de un proceso de conciliación obligatoria de 15 días y están sujetos a la condición de mantener “servicios mínimos” no especificados. Una vez que vence el plazo de la conciliación, los empleados públicos y los trabajadores en servicios esenciales deben dar un preaviso de 5 días a la autoridad administrativa y a la dependencia pública contra la cual tienen previsto realizar la huelga. Si los “servicios mínimos” no se encuentran previamente definidos en un convenio colectivo de trabajo, todas las partes negocian qué servicios mínimos seguirán suministrándose y un cronograma para la prestación. A su vez, la dependencia pública debe notificar a los usuarios sobre la huelga programada con dos días de antelación.

En general los empleadores respetaron los derechos de negociación colectiva y huelga.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas y el gobierno en general hizo cumplir la ley. Las penas fueron equiparables a las de otros delitos graves análogos (como el secuestro).

A pesar de estos mecanismos se registraron casos de trabajo forzoso, incluso de trabajo forzoso infantil. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó inspecciones frecuentes en todo el país. Prosiguieron las labores para sancionar a quienes quebrantaban la ley. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores informó 28 denuncias de trabajo forzoso en la primera mitad del año (12 de las cuales estaban siendo investigadas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

Hubo empleadores que sometieron a un número importante de bolivianos, paraguayos y peruanos, así como también a argentinos de las provincias norteañas más pobres, a trabajo forzoso en el sector textil, la agricultura, la venta callejera, la producción de carbón y ladrillos, la construcción, el trabajo doméstico y en pequeñas empresas (tales como restaurantes y supermercados). Hubo tratantes que explotaron a trabajadores chinos en supermercados en servidumbre por deudas. Algunas víctimas fueron obligadas por los tratantes a transportar drogas a través de las fronteras del país. Hubo hombres, mujeres y niños víctimas del trabajo forzoso, aunque el sexo y la edad típicos de las víctimas dependieron del sector de empleo (véase la sección 7.c.).

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/>.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La edad mínima para trabajar es de 16 años. En casos excepcionales, las autoridades laborales pueden autorizar que un menor por debajo de esa edad trabaje como parte de una unidad familiar. Los menores de entre 16 y 18 años de edad pueden trabajar en un número limitado de categorías laborales y durante una cantidad reducida de horas si han completado la educación obligatoria, que normalmente concluye a los 18 años. Los menores de 18 años no pueden ser contratados para realizar tareas peligrosas, arduas o insalubres. La ley exige que los empleadores brinden atención adecuada a los hijos de los trabajadores durante el horario laboral a fin de prevenir el trabajo infantil.

Los gobiernos provinciales y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son responsables del cumplimiento de las leyes laborales. Las sanciones por el empleo de trabajadores menores de edad fueron suficientes, por lo general, para evitar infracciones.

Si bien, en general, el gobierno hizo cumplir las leyes aplicables, según observadores algunos inspectores conocían a las personas que inspeccionaban o tenían algún tipo de relación con ellas; y la corrupción siguió siendo un obstáculo para el cumplimiento, en especial en las provincias. Las penas fueron equiparables a las de otros delitos graves análogos (como el secuestro). En agosto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social presentó un programa nacional para fortalecer las capacidades de las Comisiones Provinciales para la Erradicación del

Trabajo Infantil, con la meta de mejorar la coordinación entre la nación y las provincias.

Se registraron casos de las peores formas de trabajo infantil, entre ellas la explotación sexual comercial de menores (a veces como consecuencia de la trata de personas), trabajos forzados en servidumbre doméstica, agricultura y producción textil, y actividades ilícitas como el transporte y la venta de drogas. En 2018 el gobierno publicó el informe final de la encuesta nacional sobre trabajo infantil 2016-17. Según la Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes, el 19,8% de los niños y niñas en zonas rurales realizaban al menos un tipo de trabajo, al igual que el 8,4% de sus pares en las zonas urbanas.

Se observaron patrones similares entre los adolescentes, definidos en el informe como aquellos de 16 y 17 años de edad. El informe concluyó que el 43,5% de los adolescentes en zonas rurales y el 29,9% en las zonas urbanas realizaba al menos un tipo de trabajo. Las actividades principales eran ayudar en un negocio u oficina; reparar o construir viviendas; cortar pasto o podar árboles; cuidar a niños, ancianos o enfermos; ayudar en un taller; elaborar pan, dulces u otros alimentos para la venta; recoger papel, cajas, latas y otros materiales reciclables en la vía pública; entregar folletos o material promocional para un negocio; limpiar casas y negocios o lavar y planchar ropa para terceros, y cultivar o cosechar productos agrícolas.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo *Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor)* en <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings> y la Lista de productos hechos con trabajo infantil o trabajo forzoso (*List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*) del Departamento de Trabajo en <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods>.

d. Discriminación con respecto al empleo o la ocupación

La legislación prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo, características físicas, condición social o económica, u opinión política, y en general el gobierno hizo cumplir la ley. Las penas fueron equiparables a las de otras leyes en materia de derechos civiles. Los casos más frecuentes de discriminación en el lugar de trabajo fueron por causa de discapacidad, género y edad. Asimismo, hubo discriminación por ser seropositivo y hacia personas de origen indígena. Las mujeres tienen prohibido trabajar en ciertas industrias (por ejemplo, hay restricciones en cuanto al empleo de la mujer

en los sectores minero, fabril y del transporte). También hay restricciones al trabajo de la mujer en actividades consideradas peligrosas o arduas.

Pese a que las mujeres gozaron de la misma condición jurídica y derechos que los hombres, siguieron enfrentando discriminación económica. Varios estudios señalaron que una proporción desproporcionadamente elevada de mujeres realizó trabajos de baja paga en el sector informal, y que las mujeres ocuparon muchos menos cargos directivos que los hombres en el sector privado. Si bien la constitución consagra el principio de igual remuneración por igual tarea realizada, las mujeres ganaron aproximadamente un 25% menos que los hombres por trabajos idénticos o similares.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo continuó por debajo de la estimación oficial del umbral de pobreza para una familia de cuatro personas, pese a un incremento del 35% anunciado en octubre de 2019. La mayoría de los trabajadores del sector formal ganaba considerablemente más que el salario mínimo. En general, el salario mínimo sirvió como parámetro de la remuneración mínima que debería recibir un trabajador en el sector informal.

La legislación nacional establece normas en materia de horas laborales y seguridad y salud ocupacionales. La jornada laboral máxima es de ocho horas y la semana laboral máxima es de 48 horas. Se requiere el pago de horas extras para las horas trabajadas que superen esos límites. La ley prohíbe el exceso de horas extras y determina como permisible una cantidad de hasta tres horas extras diarias. La legislación laboral dispone entre 14 y 35 días remunerados de vacaciones, según la antigüedad del trabajador.

La ley establece un valor diferencial para las horas extras, que deben ser remuneradas con un 50% adicional sobre el valor de la hora en días laborales y con un 100% adicional los sábados por la tarde, domingos y feriados. No se puede obligar a los empleados a trabajar horas extras, a menos que la interrupción del trabajo pudiera ocasionar riesgos o lesiones, o que la necesidad de horas extras sea causada por un hecho de fuerza mayor u otros motivos excepcionales que afecten la economía nacional o por “situaciones inusuales e impredecibles” que afecten las actividades.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es responsable de garantizar el cumplimiento de la legislación referente a las condiciones laborales. El gobierno

establece normas de seguridad y salud ocupacionales, que estuvieron actualizadas y fueron apropiadas para las principales industrias del país. El gobierno hizo cumplir con eficacia las leyes en materia de seguridad y salud ocupacionales. Las penas por quebrantar la legislación en materia de salud y seguridad ocupacionales fueron equiparables a las de delitos como la negligencia. La ley exige que los empleadores aseguren a los empleados contra accidentes en el lugar de trabajo y cuando se trasladan de ida y vuelta al trabajo. Conforme a la ley, los empleadores deben brindar el seguro a través de una entidad aseguradora de riesgos del trabajo o bien brindar su propio seguro a los empleados para satisfacer los requisitos definidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación. La legislación limita el derecho de los trabajadores a presentar demandas de no haber agotado los procedimientos administrativos obligatorios ante comisiones médicas específicas.

Las leyes que rigen las condiciones laborales aceptables no fueron aplicadas de forma universal, en particular en el caso de los trabajadores del sector informal (aproximadamente, el 35% de la fuerza laboral). El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social siguió efectuando inspecciones para garantizar que los trabajadores de las empresas estuvieran inscritos y formalmente empleados. Los inspectores estaban facultados para hacer inspecciones sin previo aviso y aplicar sanciones. El ministerio realizó inspecciones en varias provincias, pero la cantidad de inspectores fue muy inferior a la recomendada por la OIT, habida cuenta del tamaño de la fuerza laboral. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo actuó como autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de las leyes de salud y seguridad ocupacionales y las actividades de las aseguradoras de riesgos del trabajo.

Los trabajadores no siempre pudieron evitar situaciones que ponían en peligro su salud o seguridad sin poner en riesgo su empleo, y las autoridades no protegieron con eficacia a los empleados en tales circunstancias. Hasta finales de septiembre, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó haber recibido 81.000 denuncias de seguridad ocupacional relativas a la COVID-19, especialmente en el sector sanitario. Como resultado, el sector superó a los tradicionalmente más peligrosos sectores fabril y minero en cantidad de denuncias recibidas.